

Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al presbítero D. José María Orihuela contra los procedimientos del Gefe de Hacienda de Guanajuato, á que se refiere el ocuro de amparo que ha motivado el presente juicio.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veinte de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Lic. Julian Torres, como apoderado del ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles, contra la expropiacion decretada por la Legislatura del Estado de Zacatecas en 15 de Marzo de 1869, y sancionada por el Ejecutivo del mismo en 17 del propio mes y año.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

En 22 de Diciembre del año próximo pasado, el ciudadano Lic. Julian Torres, apoderado general del ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles, se ha presentado so-

licitando la proteccion y amparo de la Justicia federal, contra el decreto de la Legislatura del Estado de 15 de Marzo de 1869, que lo expropió del casco de su hacienda de la Estanzuela en el Partido de Sanchez Roman, tomándole seiscientas varas de terreno por cada viento, para fundo de la municipalidad y con arreglo á lo dispuesto en la ley de 9 de Marzo de 1868; fundando su queja, en que la expropiacion decretada y llevada á efecto, no obstante sus protestas y falta de voluntad, viola notoriamente el art. 27 de la Constitucion general, que prohíbe ocupar la propiedad de las personas sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

Pedido á la Presidencia municipal de la Estanzuela, como inmediata ejecutora del decreto reclamado el informe prevenido por el artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, lo ha rendido en 3 del corriente, limitándose á corroborar los hechos expuestos por el quejoso y á manifestar, que si se le privó de su propiedad para distribuirla entre los vecinos del municipio, fué en virtud del decreto reclamado que sancionó ese beneficio para mas de ciento cuarenta familias que forman esa poblacion nascente, y obsequiando las prevenciones superiores fundadas en una ley que en su concepto, nada tuvo de ilegal.

Con estos antecedentes que no dejan duda alguna sobre los hechos en que se funda la queja hecha en nombre del ciudadano Lic. Robles, el Promotor pasa á ocuparse de las cuestiones de derecho que ella envuelve, para concluir, que debe concederse el amparo y proteccion pedido á la justicia de la Union.

Es la primera: Que en las facultades de la Legislatura del Estado no estuvo la de decretar la expropiacion de los terrenos de la hacienda de la Estanzuela; porque estando los derechos del hombre reconocidos y garantizados por la Constitucion general, todos los hombres en la República tienen los mismos derechos ó garantías individuales, que solo pueden amplearse, restringir-

so ó reglamentarse por el mismo Código fundamental y leyes secundarias, generalmente para todos los diversos Estados que forman la Union: de otro modo, si esta facultad les estuviera sometida, las garantías individuales serian diversas, ya por su amplitud, ya por su restricción y por las diferentes condiciones que señalarian para su ejercicio.

Es la segunda: Que la expropiacion solo puede hacerse por causa de utilidad pública y previa indemnizacion; y en la que motiva este juicio no hay ninguna de las dos condiciones *sine qua non*, exigidas por el artículo 27 de la Constitucion.

No hay utilidad pública, porque la expropiacion fué decretada para que los terrenos sirvieran de fundo ó egido á la municipalidad de la Estanzuela; para que conforme al artículo 2º del decreto de 9 de Marzo de 1868, quedaran en favor de sus vecinos, y segun el 4º, *en favor de los que contribuyeran á indemnizar al propietario*. Mas en primer lugar, la fraccion segunda del citado artículo constitucional, declara á toda corporacion sin capacidad para adquirir ó administrar por sí bienes raíces; y en segundo, con ó sin los terrenos expropiados, se ha podido dar á la poblacion de la Estanzuela un nuevo ser político, ensanchando la esfera administrativa del Estado; y si ella tiene los elementos necesarios para su subsistencia como municipalidad, de nada le servian terrenos que no podia poseer ni administrar conforme á la ley fundamental, y menos cuando el mismo decreto que se los daba, le mandaba enagenarlos en favor de los vecinos que tuvieran con qué indemnizar al propietario.

Por otra parte; tampoco hay utilidad pública en la division del terreno expropiado, hecha conforme al decreto de 9 de Marzo de 1868 entre los vecinos contribuyentes para la indemnizacion, que segun el informe de la Presidencia municipal de la Estanzuela han sido ciento cuarenta y tantos.

Siendo la utilidad pública la conveniencia ó el interés comun y universal de la ma-

sa de los individuos de un pueblo ó de un Estado; aquella que cede en beneficio comun de todos ellos, y que redundando en provecho de todos y de cada uno, hace que la cosa que lo produce esté fuera del dominio particular de alguno, resulta que la expropiacion reclamada cede solo en beneficio de los ciento cuarenta y tantos contribuyentes á la indemnizacion, que usarán los terrenos con exclusion de cualquiera otro; y sin disputa no es el número de beneficiados lo que constituye la utilidad pública, sino el carácter de propiedad comun y general que tienen las cosas públicas, que siendo de todos y de cada uno, nadie tiene sobre ellas dominio exclusivo y absoluto.

Por último; no ha habido la previa y justa indemnizacion requerida por el artículo constitucional. La cantidad de trescientos sesenta y seis pesos, señalada por la resolution del Gobierno del Estado de 19 de Junio de 1869, como precio de los terrenos expropiados, fué fijado arbitrariamente por un funcionario que tenia interés en llevar á efecto la expropiacion decretada por la Legislatura, por lo mismo injusto y parcial, á la vez que no se entregaba previamente á la ocupacion de los terrenos, sino que fijando un plazo de tres meses posterior á dicha ocupacion, hizo ilusorios los derechos del propietario, violando la garantía acordada por el artículo 27 de la Constitucion.

Por todo lo expuesto, y reasumiendo en los siguientes puntos:

1º No estuvo en las facultades de la Legislatura del Estado expedir su decreto de 15 de Marzo de 1869, porque no tiene la de emplear, restringir ó reglamentar el ejercicio de las garantías individuales.

2º Los terrenos expropiados en virtud de tal decreto se distribuyeron entre determinado número de vecinos de la municipalidad de la Estanzuela, que contribuyeron á indemnizar al propietario.

3º La expropiacion así hecha, no es de utilidad pública que ceda en beneficio comun y general de todos los vecinos del municipio.

4º Ni aunque cediera en beneficio de todos ellos habría utilidad pública, sino de los beneficiados; siendo que no se destinaron los terrenos á ninguna de las obras de utilidad pública que expresan las leyes de 7 de Julio de 1858, 2º, tít. 1º, Part. 2º y 31, tít. 18, Part. 3º; y porque en la expropiación por causa de utilidad pública, lo expropiado no pasa del dominio particular de uno al particular de otro ó muchos, sino que queda de uso común.

5º En la expropiación reclamada no hubo la indemnización justa y previa á la ocupación de la propiedad.

El Promotor fiscal concluye pidiendo al Juzgado se sirva declarar, que la Justicia de la Union ampara y protege al ciudadano Lic. Tomas I. Robles contra el decreto de la Legislatura del Estado de 15 de Marzo de 1869, que viola su propiedad garantizada por el artículo 27 de la Constitucion federal.

Así lo entiende de Justicia, protestando etc.—Zacatecas, diez y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y uno.—*Jesús M. Licona.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Zacatecas, Enero treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio promovido por el C. Licenciado Julian Torres en representación del C. Licenciado Tomás Ignacio Robles, en que pide amparo contra el decreto de la Legislatura del Estado de 15 de Marzo de 1869, que expropió á Robles del casco de su hacienda de la Estanzuela en el Partido de Sanchez Roman, tomándole seiscientas varas de terreno por cada viente con el objeto de formar el fundo de la municipalidad y repartir los terrenos entre los vecinos de ella, conforme á lo dispuesto en la ley de 9 de Marzo de 1868. Considerando el actor, violada la garantía de la propiedad que protege el artículo 27 de la

Constitucion federal, por no estar la expropiación fundada en utilidad pública, ni haber la previa y correspondiente indemnización.

Visto el informe del C. Presidente de la Estanzuela, autoridad inmediatamente ejecutora contra la cual se ha pedido amparo. Visto el Pedimento del C. Promotor fiscal que apoya y corrobora la demanda del C. Licenciado Torres: vistos los documentos presentados por éste y los remitidos por el C. Presidente de la Estanzuela, así como el alegato presentado por el mismo actor y todo lo demas que ver convino. Considerando: 1º que la única razón en que todas las legislaciones y todos los escritores fundan la expropiación es la utilidad pública, porque el interés privado debe ceder al interés común. 2º que en consecuencia, la expropiación es justa aunque con ella no sea beneficiada toda la Nación, si le es un Estado, una ciudad, un pueblo, porque en cualquiera de estos casos el bien y el derecho del individuo, cede al bien y al derecho de la comunidad. 3º que por las mismas razones, la expropiación es injusta, cuando beneficia á algunos individuos, porque el bien de éstos aunque sean muchos no es el bien del común ni puede anteponerse al sagrado derecho de la propiedad. 4º que las seiscientas varas por cada viente de la Hacienda de la Estanzuela no se destinan al fundo de la municipalidad, ni á la apertura de caminos, formación de calles etc., etc., sino que se mandan repartir entre los individuos que contribuyen al pago de la indemnización, lo cual constituye una utilidad privada, mas no la utilidad pública de que habla el artículo 27 de la Constitucion general; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, fracción 1ª, 13 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 y 126 de la Constitucion general, el Juzgado de Distrito del Estado, fallando definitivamente este juicio, declara: Que la Justicia de la Union protege y ampara al ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles, contra el decreto de la Legislatura del Estado de 15 de Marzo

de dicho año de 1869, por violarse la garantía de la propiedad que protege el artículo 27 de la Constitución federal. Publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision y copia de la misma sentencia para el semanario judicial. Hágase saber.

El Juzgado de Distrito del Estado lo decretó y firmó, Doy fé.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Febrero quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 22 de Diciembre del año anterior promovió ante el Juez de Distrito de Zacatecas el ciudadano Lic. Julian Torres, en representacion del ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles, contra el decreto de la Legislatura del mismo Estado, fecha 15 de Marzo de 1869, que expropió á Robles del casco de su hacienda de la Estanzuela en el Partido de Sanchez Roman, tomándole seiscientas varas de terreno por cada viento para formar el fundo de la municipalidad, segun la ley de 9 de Marzo de 1868, que manda repartir lo expropiado entre los vecinos que contribuyan á la indemnizacion, y permite hacerla hasta los tres meses, apoyando su queja el interesado, en que la expropiacion decretada y llevada á efecto, viola la garantía de la propiedad que otorga el artículo 27 de la Constitución federal, por no estar esa expropiacion fundada en utilidad pública, ni practicada con la prévia y correspondiente indemnizacion: Visto el informe del ciudadano Presidente municipal de la Estanzuela, autoridad inmediatamente ejecutora del decreto que se reclama por el ocurno, el pedimento del ciudadano promotor fiscal, que sostiene su procedencia: los

documentos exhibidos en el juicio para dilucidarlo, y la sentencia del Juez de Distrito que la decretó.

Considerando: Que aun cuando hubiera utilidad pública al dar asiento á la Municipalidad de la Estanzuela con los terrenos que la Legislatura ha decretado para su fundo, en primer lugar, no consta que la extension de ella sea necesaria con tal objeto, y en segundo lugar, habiéndose señalado el plazo de tres meses para hacer la indemnizacion de los terrenos expropiados, resulta que ésta no ha sido prévia. De conformidad con el texto constitucional que se invoca, y la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 31 de Enero próximo pasado en la que el Juez de Distrito de Zacatecas declaró: que la Justicia de la Union protege y ampara al ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles contra el decreto de la Legislatura del Estado de Zacatecas de 15 de Marzo de 1869, por violarse la garantía de la propiedad, que protege el artículo 27 de la Constitución federal.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado con copia certificada de este fallo; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.) *S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.